

JORGE SOTO

A lo largo de la tradición diplomática chilena, son pocos los casos de embajadores que han tenido que abandonar sus destinaciones por motivos políticos. Curiosamente, dos de esos casos han ocurrido durante la administración de Gabriel Boric. Aunque por razones completamente distintas, el representante diplomático chileno en Israel tuvo que retornar a Santiago por el conflicto en Gaza y la semana pasada Jaime Gazmuri (PS) se enteró por X, mientras daba una entrevista, que el régimen de Nicolás Maduro le exigía abandonar Venezuela en un plazo de 72 horas a raíz de que La Moneda no había reconocido los resultados que dieron como ganador al chavismo en las elecciones del 28 de julio.

Gazmuri, un experimentado político de 80 años, pasaba sus días dictando resoluciones en el Tricel metropolitano hasta abril de 2023, cuando el canciller Alberto van Klaveren le pidió asumir la embajada en Caracas. El exsenador ya tenía experiencia en el rubro puesto que fue embajador en Brasil designado por Michelle Bachelet. Fue uno de los fundadores del Mapu y luego del golpe de Estado tuvo que exiliarse en Italia y Argentina.

Por distintos vaivenes políticos, esta vez fue un gobierno de izquierda el que le pidió abandonar su misión diplomática y ser un "embajador sin embajada", como él mismo se autodefinió esbozando una sonrisa.

—¿No es el Centro Carter un aval suficiente para ratificar que la elección la ganó el candidato Edmundo González?

—Es una decisión que tiene que ser tomada a nivel político por el canciller y el Presidente. Nosotros hemos dicho que los resultados no se ajustan a la normativa tanto constitucional cuanto legal de la propia Venezuela. Por tanto, los datos que ha entregado el CNE no cumplen con las condiciones mínimas para ser aceptados. Nosotros no vamos a aceptar esos datos hasta que no se entreguen las actas de cada mesa al término de cada votación. Siempre se han dado resultados totales, subiendo las actas en un sistema moderno y blindado como el venezolano. Hay un plazo legal para subir esas actas y ese plazo venció el viernes pasado. Normalmente se dieron resultados mucho antes del plazo legal, en un primer plazo de 48 horas y junto con el plazo se entregaron las actas, que es la única manera de verificar que el resultado global está verificado. Ahí la conclusión obvia es: si ganó Maduro, ¿por qué no subió las actas? El que gana y tiene la evidencia de su triunfo es el más interesado en mostrarlo. Me parece un argumento elemental. El Presidente Maduro ganó la elección, pero no hay ningún acta que diga dónde ganó y en qué mesa, distrito y centro electoral.

—¿Para Chile no basta con ese informe?

—Mira, el Centro Carter es muy respetado en materia de derechos humanos y de seguimiento político y electoral y tiene mucha expertise en Venezuela también. Yo no conozco cuáles son los elementos en los que se basan, porque corresponde a un organismo muy especializado y yo no he leído el informe para dar una opinión. El Centro Carter y su informe son muy importantes además porque el primer informe se hace cargo de un conjunto de irregularidades y problemas que tuvo el proceso electoral con una cancha muy desnivelada, pero de lo que fui testigo es que el acto (de la elección) fue muy normal hasta la noche de ese día, en donde todo comenzó a funcionar de manera muy irregular.

"Maduro se ha proclamado presidente electo y eso es lo que nosotros objetamos"

—¿Y qué caminos se pueden seguir ahora? Se habla de repetir la elección y otras alternativas...

—Son seis meses de transición en donde Maduro debería asumir la primera semana del mes de enero de 2025. Él se ha proclamado Presidente electo y eso es lo que nosotros objetamos, que no se han cumplido las condiciones que establece la propia Constitución y no terceros. Pedimos que se respete la Constitución venezolana. Es algo tan simple. Ellos tienen las actas y tienen la tecnología para subirlas. La crisis es profunda y estamos preocupados porque se han producido algunos problemas de derechos humanos. Lo que he-

Jaime Gazmuri (PS), embajador de Chile en Venezuela:

"Creo que hay que hacer una distinción entre lo que fue Chávez y lo que es Maduro"

La salida de la crisis requiere de un "gran acuerdo nacional", a juicio del diplomático. De lo contrario, las consecuencias podrían ser graves para toda América Latina, pero en especial para Chile, advierte.



Jaime Gazmuri, embajador de Chile en Caracas.

"La solución de la crisis venezolana requiere un gran acuerdo nacional porque si no es muy probable que se profundice, con efectos negativos para todos en América Latina y en Chile de manera particular".

mos afirmado es que la solución de la crisis venezolana requiere un gran acuerdo nacional porque si no es muy probable que se profundice, con efectos negativos para todos en América Latina y Chile de manera particular.

—¿Qué acciones tomará Chile?

—Lo que ha señalado el canciller con mucha fuerza: apoyamos los esfuerzos mediadores que en este momento están haciendo los tres países, que son Brasil Colombia y México, y la disposición nuestra es apoyar con fuerza esa mediación. El canciller ha dicho que estamos disponibles para apoyar en ese esfuerzo y lo que yo entiendo que lo ha dicho es para una etapa posterior porque en las actuales condiciones, en que no tenemos diplomáticos en Caracas por una resolución a mi juicio bastante arbitraria del propio gobierno venezolano, evidentemente que hoy día no tenemos ninguna capacidad de mediación.

—¿Nosotros quedamos fuera de esa negociación por la escalada de declaraciones entre Boric y el régimen? ¿Qué hizo usted para contener esa tensión?

—Han habido declaraciones muy desafortunadas de figuras políticas importantes como Diosdado Cabello, que no es de gobierno, pero es muy importante, han habido declaraciones también que son muy insultantes del can-

ller Yvan Gil. Lo que he recomendado, y eso se ha hecho en Chile de manera clara es no caer en las provocaciones y mantener la cabeza fría. Tenemos convicciones que defendemos con autoridad porque Chile argumenta, Chile no insulta.

—¿Se equivocó la izquierda chilena en respaldar por tantos años la experiencia chavista?

—Creo que hay que hacer una distinción entre lo que fue Chávez y lo que es Maduro. No digo más porque como embajador no me corresponde hacer análisis sobre si la izquierda se equivocó o si la derecha se equivocó. Cuando deje de ser embajador lo haré.

—¿Cómo definiría usted a la administración de Maduro?

—Tengo una impresión de que si no se reconoce el resultado o si no se demuestra el resultado electoral, salvo que haya un acuerdo político, evidentemente eso pasa un límite, un atributo indispensable de todo régimen que se pretende democrático y eso tiene que ver con el respeto absoluto a la soberanía popular.

—El diputado Boris Barrera (PC), que fue un observador en estas elecciones, dijo que esta presión sobre el régimen se produce por la inmensa riqueza pe-

"Tengo una impresión de que si no se reconoce el resultado o si no se demuestra el resultado electoral (...) eso pasa un límite, un atributo indispensable de todo régimen que se pretende democrático".

trotera que hay en Venezuela, igual como ocurrió en Chile con la nacionalización del cobre. ¿Qué le parece?

—No me corresponde argumentar con el diputado Barrera.

Gazmuri se toma siete minutos para explicar cuáles fueron las misiones encomendadas por el Presidente Boric cuando fue designado en el cargo en mayo de 2023. Una de ellas era la elección del 28 de julio, el respeto por los derechos humanos en ese país y un tercer aspecto que intenta explicar a fondo: el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea sobre el régimen. Un discurso que Boric ha defendido también en Cuba.

"Nosotros como diplomacia chilena tenemos una larga tradición de oponernos a todas las acciones unilaterales. Aceptamos sanciones que vengan impuestas por organismos, multilaterales y particularmente por el Consejo de Seguridad", dice el embajador.

—Pero las sanciones en organismos multilaterales contra Venezuela han sido históricamente rechazadas por Rusia y China, ¿entonces cómo se pueden aplicar?

—Las sanciones han sido aplicadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos.

—Yo le digo las sanciones de los orga-

nismos multilaterales...

—No. Las sanciones a Venezuela han sido aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos. Las primeras, que fueron más leves con la administración del Presidente Obama, siguieron con Trump y se han mantenido con Biden. Con los Acuerdos de Barbados se aliviaron las sanciones, pero después se han reimpuesto, en perjuicio de que siguen habiendo por la vía de licencias a empresas multinacionales de petróleo en los mercados internacionales. Las sanciones afectan al Estado venezolano y están sancionadas todas las empresas del Estado. Y la empresa principal del Estado PDVSA, que es la empresa encargada de la extracción, refinamiento y comercialización del petróleo, que es un recurso básico para el país y por tanto las sanciones afectan a los pueblos.

Asunto migratorio

—¿Ha tomado contacto con autoridades venezolanas para que se reabra la embajada en Chile?

Todavía no he tomado ningún contacto, pero porque eso se resuelve a nivel consular. Nuestra dirección consular está muy interesada en ese asunto, pero hasta ahora no hemos tenido éxito en intentar convencer a la autoridad consular venezolana que por el bien de sus compatriotas retrocedan de la decisión de no dar asistencia consular en Chile. Nosotros sí la estamos dando en Caracas y en Puerto Ordaz.

—¿Preocupa la suspensión de vuelos comerciales con expulsados?

—Dentro de la agenda, ese es un tema muy central. Se realizaron vuelos en aerolíneas comerciales de manera importante. En 2023 se realizaron 343 expulsiones. En vuelos charter se realizaron 16. En 2024 se han realizado 313 y 65 en vuelos charter y 148 en vuelos administrativos. Eso está suspendido y la suspensión de la presencia de diplomáticos daña la relación y daña a los pueblos.

—¿Usted vislumbra una posible oleada migratoria hacia el sur o se estaría optando por salir al norte por Panamá?

—Sobre eso todavía no hay información. Entiendo que aquí se está trabajando muy intensamente por parte del Ministerio del Interior. Creo que todavía es temprano para establecer magnitudes y flujos porque eso va a depender también de cómo evoluciona la situación en Venezuela y de cómo evoluciona la situación económica. La verdad es que los últimos tres o cuatro años hubo dentro de todo un cierto proceso de recuperación, hubo por primera vez en estos años un entendimiento bastante razonable con la empresa privada que sigue siendo muy importante en Venezuela y que no está sancionada y eso es algo que no se sabe afuera de las acciones afectan al Estado. El sector privado se ha activado mucho en el último tiempo.

—¿No cree que fue un error firmar el convenio de colaboración policial del subsecretario Monsalve, considerando las múltiples polémicas y obstrucciones de parte del régimen de Maduro?

—Al contrario, fue un acierto y nos ha servido mucho. Antes del convenio se estableció una relación bastante fluida con el equivalente a la PDI chilena y eso permitió un intercambio de información que nos fue muy útil. Información en dos sentidos: reportes de la policía venezolana sobre identificación de bandas de crimen organizado en Venezuela, con datos de personas, mecanismos de operación, entre otros. Segundo, las respuestas de consultas hechas por nuestra policía, normalmente a requerimiento de la fiscalía que eran básicamente sobre identificación de venezolanos que estaban aquí y eran sujetos de investigación por delitos mayores como secuestro, asesinatos, secuestros extorsivos. En el año 2023 tuvimos 166 consultas y 37 reportes. Este año, y hasta que se suspendió esta relación, teníamos 64 reportes y 48 consultas. Quiero decir que más del 95% de las consultas son respondidas y lo otro que es muy importante aclarar porque se ha producido aquí un malentendido es que hemos recibido solo una consulta por parte de Venezuela y esa consulta se refería a un ciudadano venezolano que no estaba en Chile. La relación no ha sido tan fluida entre la fiscalía y los ministerios públicos. Hemos visto todos los malentendidos y problemas que han habido, que ha sido un área compleja, pero en esa relación obviamente no interviene la embajada porque el Ministerio Público es un ente autónomo.